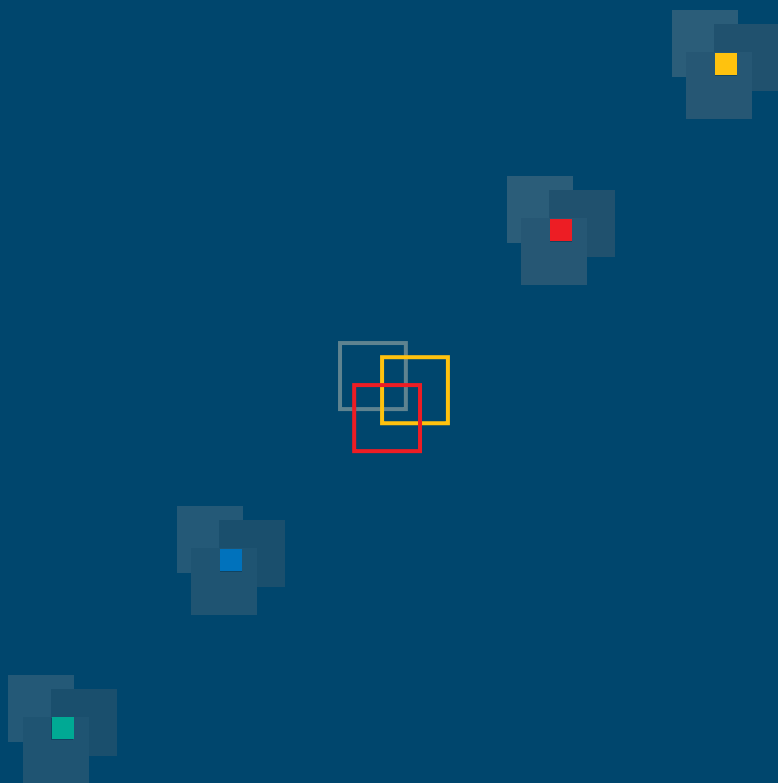


Crisis económica global y respuestas desde el mundo del trabajo: República Dominicana



Organización
Internacional
del Trabajo



MAX PUIG
VIRGILIO LEVAGGI

CRISIS ECONÓMICA GLOBAL Y RESPUESTAS
DESDE EL MUNDO DEL TRABAJO:
REPÚBLICA DOMINICANA

Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2011
Primera edición 2011

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, deben formularse las correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a: pubdroit@ilo.org, solicitudes que serán bien acogidas.

Organización Internacional del Trabajo
PUIG Max, LEVAGGI Virgilio
Crisis económica global y respuestas desde el mundo del trabajo: República Dominicana
República Dominicana, OIT, 2011
Trabajo decente, recesión económica, creación de empleos, democracia, desarrollo social, América Central, República Dominicana

13.01.3

ISBN 978-92-2-325110-9 (print)
ISBN 978-92-2-325111-6 (web pdf)

Datos de catalogación de la OIT

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione.

Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna.

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías o en oficinas locales de la OIT en muchos países o pidiéndolas a: OIT. Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Las Flores 275, San Isidro, Lima 27, ó al Apartado Postal 14-124, Lima, Perú. También pueden solicitarse catálogos o listas de nuevas publicaciones a la dirección antes mencionada o por correo electrónico a: centrodocumentacion@oit.or.cr

Vea nuestro sitio en la red: www.oit.or.cr
Impreso en República Dominicana

CRISIS ECONÓMICA GLOBAL Y RESPUESTAS DESDE EL MUNDO DEL TRABAJO: REPÚBLICA DOMINICANA

MAX PUIG
VIRGILIO LEVAGGI

SUMARIO

Introducción	I
I Diálogo y nuevo desarrollo	1
II Crisis y resiliencia latinoamericana	
Día Mundial de los Derechos Humanos	21
Respuesta a la crisis: Empleos verdes	25
Primer Día Mundial de la Justicia Social	30
Enfrentando la crisis: ¿Tiene algo que ver la democracia?	35
Día del Trabajo: De Versalles a Londres	40
Por el empleo: Pacto Mundial	45
L'Aquila, Roma, Ginebra	50
Otra lectura: otras respuestas	54
¿Recuperación sin empleo?	59
Desafío: Crecimiento con trabajo	64
Tripartismo y diálogo social	69
América Latina: ¿Sólo nos va bien en Sudáfrica?	74
Poniendo a la infancia primero	78
FMI – OIT: Recuperación con empleo	83
Latinoamérica: Patio trasero de nadie	87
La resiliencia latinoamericana	92



INTRODUCCIÓN

La globalización que irrumpe a fines del siglo pasado, generando indudables expectativas de progreso, adquiere su peor rostro con la crisis financiera que se inicia en el mundo desarrollado (2008) y se expande hacia las economías reales, cuyos efectos aún impactan con violencia no sólo a los sistemas productivos europeos sino también a economías en diferentes partes del mundo.

La primera crisis económica global evidenció algo que para algunos fanáticos de la globalización pasaba desapercibido: la importancia de lo nacional, de lo local. Una mejor gestión de la globalización supone, en los países, una dimensión interna que no puede ni debe ser descuidada.

La convocatoria, en República Dominicana, de una “Cumbre por la unidad nacional frente a la crisis mundial” (2009) ha resultado una herramienta útil. Ella se sustenta en la historia reciente de diálogo y concertación en el país (década de los 90s).

El capital social dominicano del diálogo fue puesto al servicio de la recuperación y las cifras del crecimiento económico del país, así como sus perspectivas, están ahí para mostrar la pertinencia de la opción asumida por el Presidente Fernández y la dimensión del problema cuando se aprecia cómo, pese a todos los esfuerzos, el crecimiento económico aún no ha generado suficientes puestos de trabajo en el país.

Ya en 2005, en Mar del Plata, los líderes de las democracias americanas señalaron: “Reconocemos que el crecimiento económico es una condición básica e indispensable, pero no suficiente, para enfrentar las elevadas tasas de desocupación, la pobreza y el crecimiento de la economía informal. Reconocemos que sólo los países que han logrado crecimiento económico sostenido han tenido éxito en disminuir la pobreza. Sin embargo, en el pasado reciente, algunos países de nuestro Hemisferio han pasado por períodos de crecimiento económico que no se han traducido en tasas de empleo equivalentes, acentuando los problemas existentes de alta concentración de ingresos, pobreza e indigencia. El desafío consiste en sostener tasas más altas de crecimiento con equidad e inclusión social, y generar mayores oportunidades, inversión social y desarrollo social (8)”

El Presidente Fernández en la IV Cumbre de las Américas destacó que la clave de la paz está en la creación de empleo.

En la Cumbre dominicana contra la crisis, en la Mesa de Trabajo de Política Social y Empleo, se presentó un Plan de Acción de corto plazo y una Estrategia Nacional de Desarrollo. En ese marco, el Ministerio de Trabajo ha sido un actor clave, que ha ejercido un liderazgo para facilitar el proceso de diálogo y la ejecución de sus acuerdos.

Hace pocas semanas, el diálogo tripartito en el que se sigue perseverando, concretó que 525,751 trabajadores dominicanos del sector privado no sectorizado, vieran reconocidos un aumento del 17 por ciento del salario mínimo, recientemente aprobado por el Comité Nacional de Salarios (CNS).

La cooperación entre el Ministerio de Trabajo dominicano y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) -antes y durante la crisis así como en la actualidad- evidencia la importancia de articular la experiencia mundial en espacios nacionales y aún locales. Simultáneamente, es útil aprender de las buenas prácticas en dichos espacios para promover su internacionalización.

Esta cooperación y la que se lleva adelante con los constituyentes empleadores y trabajadores de la OIT, no sólo se ha dado en el impostergable campo de los derechos laborales, sino también, que ha enfatizado la acción en el campo de la articulación de las políticas macro, meso y microeconómicas para promover

crecimiento con generación suficiente de empleo: mejores estrategias públicas y decisiones privadas para avanzar en la promoción de trabajo decente. También se ha consolidado una agenda de colaboración en seguridad social y se ha acompañado técnicamente el diálogo social.

Como señalara el Ministro de Trabajo de la República Dominicana en su discurso en la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo: “La crisis nos demuestra que asistimos al punto final de un modelo de globalización, caracterizado por altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, tanto entre los países como al interior de cada uno de ellos.”

Ese punto final no llegará sólo. A nivel local e internacional, se necesitan políticas y estrategias orientadas a la generación de empleo de calidad; más y mejores empresas que creen más y mejores empleos, serán las que sentarán las bases para un crecimiento sustentable en un nuevo paradigma de desarrollo centrado en la gente.

Las contribuciones que se presentan del Ministro Puig y del Director Levaggi buscan ilustrar cómo en la República Dominicana y desde la OIT se ha venido trabajando a partir del firme convencimiento que la promoción del trabajo decente es la mejor contribución para combatir la pobreza y consolidar la democracia en los países ubicados en el Istmo Centroamericano y en la antigua Hispaniola.

Como se señala en la Declaración de la IV Cumbre de las Américas: “Los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio reafirmamos el papel fundamental que otorgamos a la creación de trabajo decente para cumplir con nuestros compromisos de enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Reconocemos una vez más el valor del trabajo como actividad que estructura y dignifica la vida de nuestros pueblos, como un instrumento eficaz de interacción social y un medio para la participación en las realizaciones de la sociedad, objetivo primordial de nuestra acción gubernamental para las Américas (76).”

La resiliencia que han demostrado la mayoría de los países latinoamericanos, frente a la crisis global, tiene que ver con la importancia que viene adquiriendo el mundo del trabajo en el proceso de toma de decisiones públicas y privadas. La contribución de la Patria Grande Latinoamericana a la humanización de la globalización, en el siglo XXI, tiene que ver con el éxito en articular crecimiento económico con generación de trabajo decente, inclusión social con aumentos de competitividad en las economías al sur del Río Grande.



I DIÁLOGO Y NUEVO DESARROLLO

Max Puig

El llamado proceso de globalización ha conllevado muchos cambios en las relaciones entre los países. Se han incrementado los niveles de interdependencia y se han desarrollado nuevos mecanismos de cooperación y de competencia, entre los que se destacan los tratados de libre comercio bilaterales y regionales. Si bien la globalización ha abierto nuevas oportunidades, no es menos cierto que también ha traído consigo nuevos retos y desafíos. Uno de estos es la necesidad de mantener un equilibrio a escala mundial entre los objetivos económicos y los sociales, ambientales y laborales.

La crisis financiera y económica mundial ha puesto de manifiesto de manera patente la importancia de alcanzar este equilibrio. Aunque su punto de partida se situó en el terreno financiero, sus repercusiones han sido enormes en el mercado de trabajo, dejando sin empleo y protección a millones de personas en todo el mundo.

La crisis evidencia que nos acercamos al punto final de un modelo de globalización caracterizado por altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso entre los países, así como al interior de cada uno de ellos. También pone de relieve el fracaso de una visión de política económica que sobrevaloraba la capacidad de los mercados para autorregularse, al tiempo que se menospreciaba el rol del Estado, el cuidado del medio ambiente y la provisión de bienes y servicios públicos.

Felizmente, la historia no ha llegado a su fin. Por el contrario, crece la conciencia mundial sobre la necesidad de procurar soluciones colectivas a los grandes retos que enfrenta la humanidad y de producir profundas transformaciones en las instituciones políticas, económicas y sociales. Se han ampliado los espacios de discusión y de toma de decisiones sobre las políticas que deben ser ejecutadas para encarar la crisis. No es casual que al lado del G-8 el G-20 haya asumido un rol decisivo, mientras se están produciendo importantes cambios en organismos tan relevantes como las Naciones Unidas, el FMI y los bancos de Cooperación Multilateral. No obstante, este proceso no es lineal y está lleno de contradicciones y conflictos de intereses.

En este contexto ha tomado mayor relevancia la *Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa*, emitida en 2008 en el marco

de la 97ª Conferencia Internacional del Trabajo. Con esta declaración la OIT dejó claramente establecida su posición de que se requiere impulsar una globalización basada en la solidaridad y la equidad y que coloque al ser humano en el centro del proceso de desarrollo. Se hace hincapié en la importancia de un enfoque integral, basado en los cuatro objetivos estratégicos de la OIT: más y mejores empleos, protección social, cumplimiento de las normas laborales y ejercicio del diálogo social.

Sobre la base de esta visión, y como respuesta a la crisis que ya se anunciaba con fuerza en junio de 2008, los gobiernos, empleadores y trabajadores representados en la OIT aprobaron el Pacto Mundial para el Empleo, que puede ser considerado como una derivación del Programa de Trabajo Decente del organismo tripartito mundial. La idea central del Pacto es enfrentar la crisis sobre la base de políticas públicas centradas en el fomento del empleo productivo, al tiempo que se crean las condiciones para contribuir a impulsar un nuevo modelo de desarrollo global basado en principios de equidad, justicia social y sostenibilidad ambiental.

El Pacto ha sido acogido por los más importantes organismos internacionales. De manera particular, vale la pena resaltar el apoyo que le brindó el G-20 en su cumbre de Pittsburgh, en cuya declaración final se expresa textualmente lo siguiente:

“Nos comprometemos a poner en práctica planes de recuperación que promuevan el trabajo decente, ayuden a preservar el empleo y den prioridad a la creación de puestos de trabajo”. El texto precisa que “los problemas actuales no constituyen una excusa para ignorar o debilitar las normas del trabajo internacionalmente reconocidas”.

Soy de los que creen que el momento es oportuno para, entre todos, impulsar una nueva globalización basada en un desarrollo económico y social integral, sostenible e incluyente, con equidad social y de género y respetuoso del medio ambiente. Se requiere impulsar una globalización basada en la solidaridad y el respeto a la diversidad, donde se fortalezca el sentido de interdependencia, cada país cumpla con sus responsabilidades y pueda beneficiarse con el desarrollo del intercambio internacional y la competencia regulada.

La República Dominicana tiene ante sí el reto de definir y ejecutar políticas y acciones que le permitan enfrentar los efectos de la crisis, mientras fortalece sus capacidades para lograr una inserción exitosa en los mercados mundiales y, sobre todo, construir una sociedad cohesionada donde cada dominicano y dominicana pueda desarrollar plenamente sus potencialidades y vivir de manera digna.

La crisis mundial encuentra a la República Dominicana en una situación bastante compleja. En

efecto, su economía ha tenido uno de los más altos niveles de crecimiento económico de América Latina y el Caribe a lo largo de las últimas décadas. Durante el período 1961-2007, el PIB dominicano se expandió a un ritmo anual de 5.3%, mucho más rápido que el promedio de la región, que fue de 3.8%. Sin embargo, la expansión económica no se ha visto acompañada por una reducción sustancial de la pobreza y la desigualdad: en la República Dominicana se ha dado una relación asimétrica entre crecimiento económico y reducción de la pobreza.

Desde el punto de vista laboral, el modelo dominicano se ha caracterizado por reposar en una mano de obra poco calificada, de baja productividad y escasamente remunerada, en un círculo vicioso que no permite generar empleo en cantidad y calidad suficientes. Basta con señalar que el nivel de desempleo ampliado no ha descendido de un 14% de la población económicamente activa en las últimas décadas y que el empleo informal se ha mantenido rondando el 55% de esta misma población.

La crisis económica mundial puso en evidencia las vulnerabilidades de la República Dominicana en términos económicos y sociales. Los efectos coyunturales de la crisis se pusieron de manifiesto desde finales de 2008, pero se expresaron de manera más severa en el primer trimestre de 2009. Durante este periodo el crecimiento del PIB fue de apenas un 1%, en contraposición al 5.7% alcanzado el año anterior.

Los ingresos totales del Estado se desplomaron en un 14.3%. De igual manera, las principales fuentes de divisas se vieron muy afectadas: las exportaciones cayeron en un 24.1%, mientras el flujo de turistas disminuyó en un 5.2% y las remesas de dominicanos residentes en el extranjero se redujeron en un 7%. Todo esto se sumó a una situación de déficit fiscal que en el año 2008 había alcanzado un 3.4 del PIB y a un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que se cifró en US\$4,436.8 millones, equivalentes a un 9.7% del PIB.

Frente a esta situación, el gobierno dominicano consideró que su estrategia para enfrentar los efectos de la crisis debía reposar en lograr un amplio acuerdo nacional, que permitiera la definición y ejecución de medidas consensuadas, establecidas en función de las condiciones específicas del país.

En enero de 2009 el presidente de la República convocó a la Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial, invitando a participar en ésta a todos los agentes económicos, políticos y sociales del país. La convocatoria implicaba a todas las instancias dependientes del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, gobiernos locales, partidos políticos y organizaciones sociales de toda índole: gremiales, sindicales, religiosas, culturales, sociales.

Los trabajos de la Cumbre fueron concebidos en dos etapas. La primera, considerada de corto plazo, estuvo dirigida a definir políticas y acciones orientadas a neutralizar o a mitigar las consecuencias más directas de la crisis. La segunda fue pensada con una visión de mediano y largo plazo a fin de definir políticas encaminadas a readecuar las instituciones públicas y el aparato productivo.

La Cumbre definió como su objetivo general “consolidar y profundizar la gobernabilidad democrática, asegurar la estabilidad macroeconómica a corto y mediano plazo y definir las acciones y políticas económicas, sociales e institucionales que deberán adoptarse y prevalecer en el largo plazo, para acelerar y reforzar las posibilidades de desarrollo del país”.

De manera específica, la Cumbre se propuso definir medidas de corto plazo para atenuar los impactos negativos de la crisis mundial. Acordó también desarrollar un programa de trabajo para arribar a un pacto nacional que permita plasmar en una Estrategia Nacional de Desarrollo las prioridades y objetivos nacionales para los próximos veinte años.

Las jornadas de trabajo de la Cumbre contaron con una amplia participación de los más variados sectores. Se estableció un equipo interinstitucional de coordinación, encabezado por el Secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, con la

participación de funcionarios del gobierno y de representantes empresariales, de los trabajadores, así como de otras organizaciones de la sociedad civil.

Los trabajos se organizaron en siete mesas: economía y competitividad; seguridad ciudadana; política social y empleo; consolidación institucional; electricidad e hidrocarburos; desarrollo territorial, gestión municipal y medio ambiente, migración y frontera.

El evento se convirtió en un verdadero espacio de diálogo y participación democrática. Durante tres jornadas de trabajo, que se extendieron desde el 30 de enero hasta el 13 de febrero de 2009, cientos de participantes se pusieron de acuerdo en toda una serie de propuestas.

Los compromisos establecidos recogen iniciativas novedosas en prácticamente todos los ejes del desarrollo nacional. Se destacan aquellos orientados a la consolidación institucional mediante el cumplimiento de las leyes existentes y el establecimiento de nuevas leyes y normativas. También se pactó propugnar por una mejor planificación y por el ordenamiento territorial del país; por hacer eficientes los servicios públicos fundamentales, como los de salud, educación, electricidad y seguridad ciudadana, así como impulsar medidas para reducir los impactos negativos de la crisis sobre el empleo.

La Cumbre se organizó en mesas de trabajo. La de Política Social y Empleo se subdividió a su vez en torno a los temas de empleo, educación, y salud, seguridad social y protección social.

En el área de educación hubo consenso sobre 32 propuestas que van desde el incremento del gasto público para elevar la calidad de la enseñanza, hasta la búsqueda de alternativas para mejorar la vinculación entre la educación formal e informal con los sectores productivos.

En cuanto al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, se propuso incrementar el presupuesto del sector; establecer un plan estratégico para la creación de la red pública de servicios de salud; mejorar la inversión y la capacidad en el primer nivel de atención; fortalecer la participación social en los diferentes niveles del Sistema, y que el 4% del presupuesto de los municipios se destine a acciones de salud.

También se recomendó el fortalecimiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social; el mejoramiento de la eficiencia del Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado, así como la inclusión de 500 mil nuevos afiliados en ese régimen; extender la cobertura del Régimen Contributivo mediante la inclusión de los pensionados; ampliar el Plan de Servicios de Salud; incluir la entrega de antiretrovirales

entre las prestaciones, e iniciar el Régimen Contributivo Subsidiado a través de un plan piloto.

Del mismo modo, se formularon propuestas tendentes a lograr una mayor rentabilidad y garantía de los fondos de pensiones, promoviendo la utilización de nuevos instrumentos financieros que eleven los niveles de rentabilidad sin poner en riesgo la sostenibilidad del Sistema.

Con relación al empleo se propuso el diseño de políticas y planes de empleo, tanto a nivel sectorial como regional; el apoyo a las medianas y pequeñas empresas; la promoción del emprendurismo; la creación de un programa de empleos temporales; la dinamización del sector de la construcción, así como el establecimiento de incentivos para evitar el despido masivo de trabajadores.

Las propuestas aprobadas por la Cumbre sirvieron como lineamientos generales al conjunto de instituciones del gobierno. Mientras se realizaba la Cumbre, el Ministerio de Trabajo elaboraba su Plan Estratégico 2009-2012. Su eje transversal era el concepto de trabajo decente, y el diálogo social aparecía como su instrumento por excelencia. Los cuatro ejes estratégicos del Plan eran: 1) Cumplimiento de la normativa laboral y respeto a los derechos de los trabajadores; 2) Más y mejores empleos; 3) Igualdad de oportunidades y no discriminación en el trabajo, y 4) Fortalecimiento del

Sistema Dominicano de Seguridad Social.

De lo que se trataba, a partir de la realización de la Cumbre, era de fortalecer el diálogo social para avanzar hacia el cumplimiento de los acuerdos. Con relación al empleo, una de las primeras medidas que se tomó fue la emisión de un decreto presidencial mediante el cual se reformuló y se puso en funcionamiento la Comisión Nacional de Empleo (CONAEMPLO), como órgano tripartito responsable de formular propuestas de políticas, programas y planes de empleos.

La fijación de políticas de empleo debía partir de bases objetivas, de ahí la importancia de fortalecer el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD), instancia del Ministerio de Trabajo responsable de realizar estudios, análisis y recomendaciones de políticas. El OMLAD sirve como órgano técnico al servicio de la CONAEMPLO para brindar informaciones y organizar sus actividades. Entre las investigaciones realizadas por el OMLAD se destacan diagnósticos de los mercados laborales de las provincias de Santiago, Puerto Plata y Sánchez Ramírez; estudios sobre las necesidades de capacitación de los jóvenes vulnerables en los municipios de San Juan de La Maguana, Santiago de Los Caballeros, Santo Domingo Norte y Baní; un amplio y profundo estudio sobre la migración laboral haitiana, entre otros. Estas investigaciones, unidas al análisis de informaciones de fuentes secundarias, son fundamentales para el diseño

de políticas y planes de empleo tanto a nivel regional como sectorial.

Una de las demandas que se expresó con más fuerza en la Cumbre fue la del reforzamiento de las políticas activas de empleo. Durante los últimos tres años el Ministerio ha consolidado su Servicio Nacional de Empleo (SENAE). Este ha sido ampliado y desconcentrado con la apertura y desarrollo de 15 Oficinas Territoriales de Empleo en las distintas regiones del país. El SENAE ofrece servicios de intermediación y orientación para el empleo en beneficio de las personas desocupadas, al mismo tiempo brinda a las empresas un eficiente servicio de preselección de personal acorde con los requerimientos y perfiles de cada puesto de trabajo.

Dándole cumplimiento a las propuestas de la Cumbre, el Ministerio de Trabajo diseñó y puso en marcha el Programa Piloto Santiago Trabaja. Se trata de un programa de trabajo temporal, orientado a personas de bajos recursos y con muchas dificultades de inserción en el mercado de trabajo. En una primera etapa Santiago Trabaja beneficia a cuatro mil personas de los barrios pobres en seis municipios de la provincia de Santiago, ofreciéndoles una oportunidad de trabajo mientras reciben formación y orientación a los fines de elevar sus niveles de empleabilidad. De esta experiencia se extraerán conocimientos que permitan extenderla a diferentes localidades del país.

Otro espacio importante de diálogo social lo constituye el Consejo Consultivo de Trabajo, en el que participan representantes de los trabajadores y de los empleadores.

De manera particular, vale la pena resaltar el importante rol jugado por el Consejo de Directores del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Desde sus orígenes, este órgano tripartito creado hace 30 años ha sido capaz de establecer consensos entre trabajadores y empleadores en beneficio de la formación y capacitación para el trabajo. La gestión del INFOTEP ha demostrado cómo, mediante el diálogo, se ha podido realizar una gestión eficiente que es modelo en este tipo de institución en la región centroamericana y el Caribe.

Un elemento importante para el éxito del diálogo social es el estricto cumplimiento de los acuerdos. En este sentido, fue muy acertada la decisión presidencial de crear, mediante el decreto 09-175, la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos Pactados en la Cumbre, integrada por representantes del gobierno y de las instituciones de la sociedad civil. Sin embargo, a pesar del trabajo de esta comisión, una parte de las propuestas no pudieron ser realizadas dentro de los plazos estipulados. En algunos casos, a causa de restricciones fiscales, y en otros por la falta de seguimiento de parte de las instancias gubernamentales responsables de la ejecución.

De todos modos, cabe destacar que la Cumbre permitió establecer acuerdos básicos que se tradujeron en importantes medidas que contribuyeron a mitigar parte de los efectos de la crisis. Con ello quedó demostrada, una vez más, la importancia del diálogo social para unificar fuerzas y estimular la creatividad de amplios sectores sociales con vistas a la definición de políticas públicas.

Como ya se señaló, uno de los principales logros de la Cumbre fue que esta permitió la formulación de las líneas generales de una ambiciosa Estrategia Nacional de Desarrollo, con vistas a los próximos 20 años. Luego de una serie de consultas que se extendieron a lo largo de un año, se elaboró un proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su conocimiento, enriquecimiento y eventual conversión en ley. Con la Estrategia se da cumplimiento a una demanda nacional de muchos años. Por primera vez estamos ante la oportunidad de contar con un “Plan País” a mediano y largo plazo, que debería convertirse en la hoja de ruta que guíe a la República Dominicana por el sendero de un desarrollo integral, inclusivo y sostenible.

La aprobación de la Estrategia con la participación activa de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, podría ofrecerles a los futuros gobiernos una orientación de largo plazo, aunque cada ejercicio gubernamental

aporte su sello específico en base a sus prioridades y estrategias particulares.

Cuanto se acaba de señalar, a propósito del diálogo social y sus resultados en la República Dominicana, debe ser situado dentro de la evolución actual de la crisis mundial. Las respuestas de política económica provenientes desde los grandes centros de poder mundiales se orientan a favor de políticas restrictivas y de austeridad que afectan de manera particular a países como la República Dominicana.

La primera respuesta de estos centros a la crisis estuvo marcada por políticas anticíclicas. Bajo una inspiración entonces considerada como nekeynesiana, los grandes organismos financieros multilaterales trazaron la pauta de estimular la demanda en los países en vías de desarrollo para beneficio del sistema en su conjunto. Dentro de esta perspectiva se favoreció el endeudamiento externo, lo que contribuyó a mantener ciertos niveles de crecimiento económico y de empleo.

Ahora los vientos soplan en otra dirección. Las políticas restrictivas y de austeridad están a la orden del día. Impulsadas desde los países centrales y los grandes organismos multilaterales de financiamiento, estas políticas están afectando seriamente las medidas de estímulo fiscal que permitieron enfrentar la crisis con relativo éxito en los países en vías de desarrollo.

Las políticas restrictivas afectan de manera particular a países como la República Dominicana, importadores de petróleo que no han podido beneficiarse de los altos precios de los productos básicos en los mercados de exportación.

Si se agrega a lo anterior que el mercado interno es reducido y que el modelo de crecimiento excluyente en base al cual se ha desenvuelto el país presenta serios síntomas de agotamiento, se comprenderá la gravedad de la encrucijada en que se encuentra la República Dominicana.

Aún en el difícil contexto internacional, y quizás por esa misma razón, la República Dominicana está obligada a superar el modelo de desarrollo que la ha caracterizado para darle paso a un modelo de crecimiento con equidad.

La República Dominicana debe repensar su modelo productivo para aumentar la demanda interna de bienes y servicios de calidad y así generar empleos productivos. Este giro debe producirse a partir de una visión del desarrollo que genere inclusión, cohesión social y sentido de pertenencia y se construya sobre la base del principio de igualdad de oportunidades.

La clave de esta transformación se encuentra en la participación colectiva y activa de la ciudadanía. Se ha demostrado que en la República Dominicana el

problema no reside en la falta de capital y de capacidad para crear riquezas, sino en la incapacidad para facilitar la real incorporación de toda la sociedad en la creación y disfrute de estas riquezas. Esta integración solo se puede garantizar a través del fortalecimiento del capital social, entendido éste como el conjunto de instituciones formales e informales que permiten generar la suficiente confianza entre los diferentes actores que hace posible el aprovechamiento óptimo de todas las potencialidades nacionales, respetando las diferencias en cuanto a visiones, estrategias e intereses de todas las partes.



II CRISIS Y RESILIENCIA LATINOAMERICANA

Virgilio Levaggi



60 AÑOS
DÍA MUNDIAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Artículo publicado en El Heraldo de Honduras, Listín Diario de República Dominicana, El Nuevo Diario de Nicaragua, Prensa de Panamá, La Prensa Gráfica de El Salvador y el Diario de Centro América de Guatemala el 10 de diciembre de 2008.

La suscripción -después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, en un mundo con potencias imperiales y pueblos colonizados- de un instrumento jurídico internacional, la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que proclama la dignidad e igualdad de todas las personas sin distinciones de raza, sexo o creencias abrió las puertas a un cambio sociopolítico copernicano.

No se puede comprender cabalmente la expansión de la democracia en el mundo, durante el siglo pasado, si no se pondera adecuadamente la creciente legitimidad que han ido adquiriendo los derechos humanos cívicos y políticos. No se puede imaginar una consolidación de las democracias en el siglo XXI si es que no se hacen realidad cotidiana los derechos humanos socioeconómicos y culturales.

En momentos en que la crisis financiera impacta en la economía real, por tanto en la vida cotidiana de la gente, es crucial tomar conciencia de lo importante

que es la promoción de uno de los derechos que la humanidad proclamó hace 60 años como fundamental, recogiendo una tradición milenaria: el derecho al trabajo.

La exigibilidad de este derecho no se reduce a realizar una actividad productiva sino que la misma debe hacerse bajo ciertas condiciones. Es lo que la OIT llama trabajo decente, concepto con el que se expresa lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo. Este supone la consecución de cuatro objetivos estratégicos: a) promover empleo creando un entorno institucional y económico sostenible; b) adoptar y ampliar medidas de protección social adecuadas a las circunstancias nacionales; c) respetar y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y d) promover el diálogo social y el tripartismo.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha señalado que el trabajo decente es esencial para ayudar a la gente a superar la actual crisis financiera global, que también se ha convertido en una crisis de empleos.

El pasado junio, antes que explotara la mencionada crisis a escala planetaria, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó –casi premonitoriamente- la *“Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa”* en la que se señala que “Dado que la política

comercial y la política de los mercados financieros repercuten en el empleo, la función de la OIT es evaluar esos efectos con miras a que el empleo pase a ser un elemento fundamental de las políticas económicas”.

El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo.

Hace unos días, el Presidente del Gobierno Español señaló: “Defiendo el diálogo social como modelo que rija en Europa y en el gobierno de la globalización. Quiero proponerlo como modelo para el proceso de reforma del mundo que arrancó el fin de semana (del 15 de noviembre) en el G-20”.

El derecho al trabajo, a un trabajo decente, resulta esencial para combatir la crisis global y para construir una adecuada gobernabilidad de la globalización.



V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
RESPUESTA A LA CRISIS:
EMPLEOS VERDES

Artículo publicado en Prensa de Panamá, el 12 de enero y en El Heraldillo de Honduras, el 16 de enero de 2009.

La pérdida de puestos de trabajo y el desmejoramiento de las condiciones laborales para millones de hombre y mujeres en el Hemisferio, consecuencia de la crisis financiera, no puede ser marginal en una agenda interamericana –como la de la Cumbre de las Américas (Puerto España, 17 a 19 de abril de 2009)- que se propone asegurar el futuro de sus ciudadanos mediante la promoción de la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad medioambiental.

El Secretario General de Naciones Unidas ha señalado que la crisis económica global se ha convertido en una crisis de empleos. El presidente electo de los Estados Unidos anuncia un plan multimillonario para generar 2.5 millones de puestos de trabajo, apenas inicie su mandato.

La tasa de ocupación de 2008 en América Latina no se mantendrá en 2009 y el desempleo urbano regional aumentaría a un rango entre 8 y 8.3 por ciento,

lo que significaría un incremento de desocupados urbanos entre 1 millón y 1.7 millones: habría entre 17.3 y 18 millones de desocupados urbanos frente a un estimado 16.3 millones este año.

Clave en la temática de la próxima Cumbre de Puerto España es la prosperidad humana: más amplia que la mera combinación de progreso social y crecimiento económico pues incorpora dimensiones como la ampliación de la democracia, la protección del medio ambiente y la promoción de los derechos de las personas. El crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para promover la mencionada prosperidad y el trabajo decente es el puente entre dichos tipos de crecimiento y prosperidad.

Abordar el cambio climático y disminuir el vínculo entre crecimiento económico y consumo de energía basado en combustibles fósiles requiere transformaciones que permiten la generación de trabajos decentes, con eficacia ecológica y energética.

- El programa brasileño de biodiesel se ha diseñado atendiendo a un gran número de productores minifundistas en las áreas rurales desfavorecidas del país.
- No sólo hay espacio para iniciativas públicas: en el desierto de Sonora un grupo de ingenieros de la firma PetroSun imaginan ya el lago artificial

que formarán con mil estanques de 80 metros de largo por 14 de ancho para sembrar y cosechar microalgas, convertibles en 9 mil millones de litros de combustible.

El informe *“Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de carbono”* (Setiembre, 2008) ilustra cómo los esfuerzos por reducir el cambio climático y sus efectos generan nuevos empleos y cómo podrían crearse millones de puestos más, tanto en países industrializados como en desarrollo. Sectores importantes en términos de impacto ambiental y para la generación de empleos verdes son el suministro de energía renovable, construcción, transporte e industrias básicas, agrícolas y forestales.

2,3 millones de personas encontraron nuevos empleos en la energía renovable, en los últimos años. Están previstas inversiones por 630 mil millones de dólares que se traducirán en por lo menos 20 millones de nuevos empleos en este sector hasta 2030. 12 millones de personas podrían trabajar en biomasa para la producción de energía y otras industrias relacionadas. Una transición hacia la eficiencia energética en las viviendas, a nivel mundial, podría generar millones de trabajos, al mismo tiempo que hacer más limpios los empleos existentes (111 millones de personas trabajan en este sector).

La *Iniciativa Empleos Verdes* –integrada por la Organización Internacional del Trabajo, la Confederación Sindical Internacional (que representa 168 millones de trabajadores en 155 países y territorios y tiene 311 afiliados nacionales), la Organización Internacional de Empleadores (formada por 146 organizaciones de empleadores de 138 países en todo el mundo) y el PNUMA- busca movilizar a gobiernos, empleadores y trabajadores para participar en la formulación y ejecución de políticas y programas orientados hacia una economía con empleos verdes, en una acción común para promover trabajo decente en el mundo.

Alentar la generación de empleos verdes en las Américas debe ser parte de la respuesta del Hemisferio a la crisis global. Se trata de un tema relevante para la V Cumbre de las Américas.



PRIMER DÍA MUNDIAL JUSTICIA SOCIAL

Cuando la crisis financiera se ha expandido globalmente a las economías reales y se ha convertido en una crisis del empleo que afecta a millones, por primera vez en la historia se celebra el Día Mundial de la Justicia Social.

Naciones Unidas, en 2007, aprobó por unanimidad que cada 20 de febrero -a partir de este año- la comunidad internacional recuerde y renueve los esfuerzos que deben hacerse para erradicar la pobreza, conseguir el pleno empleo y promover la igualdad, entre otros objetivos.

El concepto justicia social aparece, a fines del siglo XIX, como respuesta a los excesos de la revolución industrial. No expresa la suma de bienes particulares sino la búsqueda del bien común de la sociedad. “Comprende, según Wikipedia, el tipo de objetivos colectivos que deben ser perseguidos, defendidos y sostenidos y el tipo de relaciones sociales consideradas admisibles o deseables, de tal manera

Artículo publicado en El Heraldo de Honduras, el 19 de febrero; en Prensa de Panamá, el 20 de febrero y en El Nuevo Diario de Nicaragua y La Prensa Gráfica de El Salvador el 25 de febrero de 2009.

que describan un estándar de justicia legítimo. (...) Comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población. (...) Algunos de los temas que interesan a la justicia social y a las políticas socio-económicas son la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el estado del bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales”.

En momentos en que los excesos de cierto capitalismo especulativo afectan a millones no es ocioso retomar la justicia social como inspiradora de estrategias de desarrollo que merezcan el calificativo de humanas.

Resulta particularmente oportuno que, el año pasado, la Conferencia Internacional del Trabajo aprobara la “Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa.” Justamente la OIT que nació hace 90 años para hacer frente a los excesos del capitalismo decimonónico.

La naturaleza misma de la mencionada Declaración es el trabajo decente y lo que su promoción supone para la construcción de una globalización con justicia social para todos. La Declaración aprobada por unanimidad por los Estados miembros de la OIT es un *aggiornamento* práctico de sus valores fundacionales a los desafíos que el siglo XXI presenta al mundo del

trabajo y a sus actores. Reconoce que el empleo pleno y productivo y el trabajo decente deben ser elementos centrales de las políticas económicas y sociales.

Comprender que la construcción del desarrollo se sustenta en políticas económicas y sociales balanceadas no es una novedad; sin embargo ello no ha sido parte del pensamiento predominante en las últimas décadas y para algunos conocedores es la explicación última de la crisis global.

Los miles de puestos de trabajo que se están perdiendo día a día en el mundo no son meras estadísticas: se trata de rostros concretos de hombre y mujeres cuyos esfuerzos productivos le deben generar ingresos para el sustento propio y el de sus familias, además de contribuir con el progreso común y la cohesión de sus sociedades.

Promover la justicia social en estos tiempos de crisis puede favorecer a que la globalización no sea vivida, por las mayorías, como una amenaza. La globalización, si se gestiona con pericia sociopolítica y económica, inspirada en valores, puede ser una oportunidad para profundizar la democracia y la centralidad de la persona humana en los esfuerzos por el desarrollo.

2009 en Centroamérica y República Dominicana, que tienen una tradición democrática

en la que las llamadas garantías sociales (que alientan sistemas productivos en los que actúan seres libres e iguales así como el más adecuado reparto de la riqueza), debe ser ocasión para -desde la justicia social y con trabajo decente (respetando los principios y derechos laborales fundamentales, promoviendo más y mejores empleos, expandiendo la protección social y alentando el diálogo social para la generación de consensos)- enfrentar decididamente la crisis que afecta a millones de compatriotas.



ENFRENTANDO LA CRISIS
¿TIENE ALGO QUE VER
LA DEMOCRACIA?

Artículo publicado en El Nuevo Diario de Nicaragua, el 24 de marzo;
en Prensa de Panamá, el 25 de marzo y en El Herald de Honduras, el
2 de abril de 2009.

¿Pueden ser todos los planes anticrisis iguales?
La talla única no funciona en este campo.

Cada sociedad, cada empresa, cada familia y cada individuo deben desarrollar sus propias estrategias para superar la primera crisis global que se inició como emergencia financiera, atacó las economías reales y ahora es una espiral que destruye empleos y carcome la calidad de los que no ha destruido aún. De una crisis del dinero se ha pasado a la crisis de la gente.

La respuesta a esta situación no puede ser meramente defensiva u orientada sólo a contener sus efectos. Menos aún en los países en desarrollo y aún menos en los países latinoamericanos.

En la Patria Grande la crisis, al fin y al cabo, es un fenómeno coyuntural (puede durar mucho pero terminará) que se superpone a situaciones estructurales, que comenzaron a vencerse desde comienzo del siglo y hasta 2007: pobreza, desempleo y desigualdad. Los

avances alcanzados en estos campos, combinado crecimiento económico y políticas sociolaborales, ya comienzan a desacelerarse.

Los países con amplios mercados internos deberán desarrollar estrategias diferentes a las de aquellos pequeños y será particular la que deberá llevar adelante un país cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, la mayor parte de las inversiones extranjeras y de las remesas de sus migrantes vienen de allí así como también la mayoría de los turistas que lo visitan.

Casi todos los planes anticrisis hablan de inversiones de recursos públicos en infraestructura. La construcción es uno de los primeros sectores afectados. ¿Qué pasa con los países que no tienen recursos fiscales suficientes para dedicar a este tipo de inversiones? ¿Deberían endeudarse? ¿Cómo funciona la cooperación técnica en tiempos de escasez? ¿Cómo debería incentivarse la inversión privada? ¿Cómo se promueve la inversión en infraestructura con uso intensivo de mano de obra o no es parte de la agenda? ¿Hay una normativa que permita la participación en ella de pequeñas y medianas empresas, altas generadoras de puestos de trabajo?

En 2007, se estima que en América Latina y el Caribe había un déficit primario de empleo formal (rural y urbano) próximo a 116 millones de

personas (17 millones desempleadas y 99 millones en la informalidad). Si la economía de la región crece a un promedio de 5 por ciento anual en la década siguiente, el mencionado déficit sólo se congelaría. La crisis hace prioritario y urgente la creación de más y mejores empleos y, por ello, resulta indispensable vigorizar las políticas activas de mercado de trabajo para facilitar oportunidades adicionales de formación y readaptación profesional y reforzar los servicios de colocación. Estas medidas deben estar vinculadas con las necesidades de la estructura productiva local y ser sensibles a las cuestiones de género, dado el rol de las mujeres en el mundo productivo y siendo muchas de ellas jefas de hogar.

La búsqueda de respuestas productivas para paliar la actual crisis, según las distintas condiciones y realidades nacionales, encuentra en el diálogo social y la práctica del tripartismo instrumentos idóneos para identificar soluciones y fortalecer la cohesión social y alentar una concertación que contemple respuestas de corto plazo a las urgencias que ya están en las sociedades latinoamericanas así como las estrategias de mediano y largo plazo que impulsen la superación de déficits estructurales y la deuda social de la desigualdad, que hiere a tantos en estas tierras. Ello redundará, sin lugar a dudas, en la gobernabilidad democrática.

Hace una década, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, señaló respecto de la crisis asiática:

“Una vez que la crisis financiera desencadenó una recesión económica general, el poder protector de la democracia (...) se echó seriamente en falta. Los recién desposeídos no recibieron la atención que necesitaban. Una disminución de, pongamos, no más de un 10 por ciento del producto nacional bruto quizá no parezca muy grave si ha estado precedida por un crecimiento económico de un 5 o un 10 por ciento anual durante decenios. Sin embargo, puede dejar en la miseria y arruinar las vidas de millones de personas si las penalidades de la recesión económica, en vez de repartirse, se deja que recaigan sobre quienes tienen menos recursos para soportarlas.”

La crisis que se inició en el mundo de las finanzas y se ha proyectado a la economía real destruyendo empleos no puede convertirse, en América Latina, en una crisis de las democracias. Ello echaría por tierra no sólo los logros socioeconómicos del siglo XXI sino la revolución que transformó nuestras sociedades en los 80.

Las penalidades de la crisis no pueden recaer, una vez más, sobre quienes menos tienen.



DÍA DEL TRABAJO
DE VERSALLES A
LONDRES

A raíz de la revolución industrial surge la necesidad de establecer la jornada laboral de 8 horas. Desde hace más de 120 años el 1° de mayo está vinculado a dicha jornada y más genéricamente al trabajo: actividad a través de la cual la mayoría de los seres humanos conseguimos satisfacer nuestras necesidades básicas y las de nuestros familiares.

Además, el trabajo es el medio principal por el que los individuos buscamos realizarnos personalmente, insertarnos socialmente y ser económicamente provechosos.

Con la evolución de las formas de producción el trabajo desarrolla una institucionalidad tal (derechos, obligaciones, escalas salariales, relaciones laborales, acceso a la protección social, tipos de empresa, entre otros componentes) que puede hablarse, con propiedad, de mundo laboral.

Vinculada a ese mundo -desde hace 90 años-

Artículo publicado en La Prensa Gráfica de El Salvador y en El Heraldo de Honduras, el 1° de mayo y en Hoy de República Dominicana, el 5 de mayo de 2009.

está la OIT, procurando contribuir con la paz universal a través de la promoción de la justicia social. Valor éste de innegable actualidad hoy: cuando la humanidad enfrenta la primera crisis financiera mundial que ha afectado a todas las economías y que ha generado una crisis del empleo que hiere a millones en el planeta.

Conviene recordar lo señalado por la Declaración del G-20 en Londres, el mes pasado: “Reconocemos la dimensión humana que tiene la crisis. Nos comprometemos a apoyar a aquellos afectados por la crisis mediante la creación de oportunidades de empleo y mediante medidas de apoyo a los ingresos. Construiremos un mercado laboral justo y favorable para las familias, hombres y mujeres. (...) Apoyaremos el empleo estimulando el crecimiento, la inversión en educación y la formación, y mediante políticas activas para el mercado laboral centradas en los más vulnerables. Hacemos un llamamiento a la Organización Internacional del Trabajo para que, trabajando con otras organizaciones competentes, haga una valoración sobre las medidas tomadas y las que sean necesarias para el futuro”.

En 1919 las negociaciones del Tratado de Versalles contemplaron la abolición gradual de las barreras aduaneras e instauraron la OIT. Comercio y trabajo son dos temas aún hoy prioritarios en la agenda internacional, como lo demuestra la referida Declaración de Londres.

A propósito de tal instauración señala el historiador Pirenne: “Era una iniciativa atrevida y feliz. La OIT, organismo independiente, aunque teóricamente integrado en la Sociedad de Naciones, introducía un principio nuevo en cuanto a representación de los estados miembros: cada uno de ellos enviaba cuatro delegados, dos de los cuales representaban al gobierno, uno a la clase patronal y uno a la clase obrera. La labor de la OIT consistía en proponer a los estados las reformas relativas a la organización del trabajo”.

Hace 90 años se realizó la Primera Conferencia Internacional del Trabajo (Washington DC) y aprobó 6 convenios internacionales, siendo el primero sobre la jornada laboral de 8 horas en la industria. Los otros fueron sobre desempleo, protección de la maternidad y trabajo nocturno de niños y mujeres.

Desde hace 10 años, un latinoamericano, Juan Somavia dirige la OIT y ha logrado que la actividad normativa de la institución así como la cooperación técnica que ofrece se orienten por el concepto de trabajo decente.

Dicho trabajo debe ser ajustado a cada realidad nacional de acuerdo a su evolución. El mismo tiene cuatro objetivos estratégicos: a) promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que el Director General define como “mandato histórico

de la OIT”; b) creación de empleo, que considera “mandato político, aquel que viene de la calle, de las personas”; c) protección social, que entiende como “mandato ético” y d) diálogo social, al que señala como “principio organizativo de la OIT”.

De Versalles a Londres la lucha por justicia social es una constante en la que la humanidad debe perseverar. En la globalización, la promoción del trabajo decente parece el mejor camino para promover un desarrollo sustentable que merezca el calificativo de humano pues pone al centro de los esfuerzos por progresar a las personas y su trabajo.



POR EL EMPLEO
PACTO MUNDIAL

Artículo publicado en El Heraldo de Honduras, el 4 de junio; en La Prensa Gráfica de El Salvador, el 6 de junio; en La Hora de Guatemala, el 9 de junio y en La Nación de Costa Rica, el 14 de junio de 2009.

El nuevo Presidente de El Salvador ha anunciado un Plan anticrisis orientado a la creación de 100 mil puestos de trabajo, en 18 meses. Encuestas de opinión dadas a conocer al inicio de la nueva administración indican que 25% de los salvadoreños colocan al empleo y los salarios al tope de sus prioridades. El Presidente Funes también anunció el inicio de un Diálogo Nacional para el Empleo y la Política Fiscal.

El trabajo está al centro de las preocupaciones de la gente, usualmente es el eje de las propuestas electorales y debería estar en el corazón de las políticas públicas. Lo ideal para la democracia es promover un modelo de desarrollo con más y mejores empleos, a partir de políticas socioeconómicas integradas que busquen deliberadamente el crecimiento económico con trabajo decente para todos.

Proyecciones recientes para 2009 muestran un nuevo aumento del desempleo, de los trabajadores pobres y de las personas con empleos vulnerables. Por

ello la Conferencia Internacional del Trabajo (del 3 al 19 de junio) tomará en consideración un *Pacto Mundial para el Empleo* diseñado para promover una respuesta política coordinada a la crisis mundial.

En su Actualización de las Tendencias Mundiales del Empleo, la OIT presenta un rango de entre 210 y 239 millones de desempleados a nivel mundial para 2009. Esto corresponde a tasas de desempleo global de 6,5 y 7,4 por ciento, respectivamente. En América Latina, se prevé que la tasa de desempleo aumente de 7,1 por ciento en 2007 a entre 8,4 y 9,2 por ciento en 2009.

El Informe señala que un aumento de entre 39 y 59 millones de desempleados, comparado con cifras del 2007, dependerá de la efectividad en la ejecución de los gastos fiscales que decidan los gobiernos y del funcionamiento del sector financiero. En Centroamérica y República Dominicana todos los gobiernos han tomado medidas anticrisis las cuales están condicionadas por los recursos públicos de los que disponen y de la capacidad institucional pública y privada para llevarlos adelante o colaborar con ellos.

El desempleo abierto es sólo una parte del problema actual ya que la falta de trabajo decente en la subregión, por ejemplo, es más importante. Tómesese en cuenta las diferencias en las condiciones laborales entre hombres y mujeres y el alcance efectivo de la cobertura

de la seguridad social así como el trabajo infantil. En Mesoamérica y República Dominicana 21 millones de personas constituyen su fuerza laboral y casi la mitad de ellos no cuentan con empleos formales aunque igual se esfuerzan desarrollando su laboriosidad y creatividad en actividades que nos les permiten progresar aunque sí sobrevivir.

Juan Somavia, Director General de la OIT, señala que experiencias pasadas sugieren que, luego de una reactivación económica, los mercados laborales tardan en promedio 4 ó 5 años en recuperarse. Existe riesgo de que la crisis mundial del empleo persista no obstante la recuperación de los mercados de valores y del crecimiento económico. Una prolongada crisis del empleo sería, sin lugar a dudas, seria amenaza para la gobernabilidad democrática. Ella sería mayor allí donde los precios altos de los alimentos persistan, donde las grandes disparidades de ingreso entre ricos y pobres se mantengan y el debilitamiento de las clases medias se agudice.

El *Pacto Mundial para el Empleo* que será analizado con presencia de Jefes de Estado (15 y 16 de junio) estimularía la economía real y daría apoyo a las familias trabajadoras a través de medidas orientadas a fomentar el empleo. Se buscaría además una salida productiva a la crisis a través de –entre otras medidas– la promoción de las pequeñas y medianas empresas,

que son las unidades productivas que generan mayor cantidad de puestos de trabajo.

La crisis y su respuesta deberían servir para fortalecer la gobernanza democrática en Centroamérica, Panamá y República Dominicana y establecer un modelo de desarrollo que merezca el calificativo de humano porque se sustenta en políticas que ponen al centro a la gente y su trabajo.



EL TRABAJO DECENTE
L'AQUILA, ROMA,
GINEBRA

Acaba de divulgarse, en Roma, la tercera encíclica del Papa Ratzinger, Caritas in Veritate, y en L'Aquila, la Declaración de la Cumbre del G8, "Liderazgo responsable para un futuro sustentable".

La primera encíclica social de Benedicto XVI desarrolla su pensamiento respecto de lo que debe ser el desarrollo en la globalización. La Declaración de las potencias mundiales mira a la crisis y desde ella otea lo que se requiere para que el futuro de la humanidad sea mejor.

No debe pasar desapercibido el reciente artículo de los presidentes Lula y Sarkozy, publicado en Sao Paulo y París, proponiendo una globalización más democrática, solidaria y justa. Los presidentes convocan a "una alianza para el cambio" pues no es posible enfrentar los desafíos del siglo XXI con instituciones del siglo XX. La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y la ampliación del poder de decisión global de la OIT están en su agenda para un orden internacional más equilibrado y solidario.

Artículo publicado en el Diario La Hora de Guatemala el 11 de julio; en El Heraldo de Honduras, el 12 de julio; en Prensa de Panamá, el 14 de julio y en La Prensa Gráfica de El Salvador el 19 de julio de 2009.

Un rol medular para la OIT aparece en la Declaración de L'Aquila, retomando lo señalado en la Cumbre del G20 (Londres, abril 2009): "Políticas sociales y de empleo son pilares centrales en el contexto de un nuevo marco global. (...) Los países desarrollados, emergentes y en vías de desarrollo, así como las instituciones internacionales deben trabajar juntos para asegurar un crecimiento orientado hacia la generación de empleo y promover la cohesión social. Llevar adelante la Agenda de Trabajo Decente de la OIT, apoyándose en la resolución de la OIT "Recuperación de la crisis: un pacto mundial para el empleo", es pertinente para responder a la crisis a nivel mundial y promover la dimensión social de la globalización."

En su Encíclica, Benedicto XVI, reitera el llamamiento de Juan Pablo II para una coalición mundial a favor del trabajo decente, "alentando la estrategia de la Organización Internacional del Trabajo". Y se pregunta "¿qué significa la palabra "decencia" aplicada al trabajo? Significa un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que

permita a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación" (n.63)

La centralidad de la persona humana en la respuesta a la crisis -que se inició en los mercados financieros y se ha proyectado a la economía real, destruyendo empleos y socavando la calidad de los que no han desaparecido- hace que el trabajo sea prioritario en la agenda internacional para la construcción de desarrollo integral, a nivel nacional y global. Pero no se trata de cualquier trabajo, sino de uno que merezca el calificativo de decente porque respeta los derechos laborales, alienta la creación de más y mejores empleos a través de más y mejores empresas, promueve la protección social y contribuye con el diálogo social.

En ello, en julio de 2009, coinciden los principales líderes mundiales. Queda a todos los Estados miembros de la OIT -representado por gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores- que el trabajo decente se incorpore efectivamente en la construcción de una globalización si se quiere que sea más justa y equitativa. Desde su sede en Ginebra, la OIT alienta el trabajo decente pues -en la globalización- sin este no hay justicia social y sin esta no hay democracia.



RESPECTO DE LA CRISIS
OTRA LECTURA:
OTRAS RESPUESTAS

Artículo publicado en El Heraldo de Honduras, el 14 de agosto; en Prensa de Panamá, el 20 de agosto; en La Nación de Costa Rica, el 19 de setiembre; en El Nuevo Diario de Nicaragua, el 28 de setiembre; en La Prensa Gráfica de El Salvador, el 8 de noviembre y en Hoy de República Dominicana, el 14 de noviembre de 2009.

“La crisis contemporánea comenzó por los activos tóxicos en los mercados financieros desarrollados.” Esta es una lectura; pero hay otras.

Para Jean-Paul Fitoussi la crisis nace de la desigualdad y de la falta de respuesta a lo que se conoce como la cuestión social: trastorno producido por el encuentro del progreso material con el decaimiento o relajación de los principios ético-sociales, trastorno que se caracteriza por un vivo malestar de todas las clases de la sociedad.

La respuesta tradicional para salir de las crisis, el estímulo al consumo, para este economista no es viable porque el problema básico hoy son los ingresos o más bien la falta o insuficiencia de los mismos.

En América Latina, entre 1995 y 2007, no obstante el gran aumento del Producto Bruto Interno per cápita, el crecimiento salarial fue únicamente 0.3%. Esto quiere decir que los salarios reales se rezagaron

respecto del crecimiento de la productividad. Por ello los salarios mínimos -en la crisis- retoman un lugar preponderante en la agenda pública y no sólo en la región. En meses pasados el Presidente Obama aumentó el salario mínimo en los EE.UU. Para él las personas que trabajan tiempo completo no deben vivir en la pobreza. Por ello es objetivo de su gobierno que el salario mínimo en su país llegue a 9.50 dólares la hora, para 2011.

Según Fitoussi la acelerada integración de los países emergentes en el comercio mundial aumentó la competencia en el plano laboral y ello acrecentó la moderación salarial tanto como la desigualdad en los ingresos: quien recibía poco, recibió menos y quien tenía mucho, recibió más.

Latinoamérica sigue siendo el continente más desigual del mundo; por tanto es más apremiante responder adecuadamente a la crisis ya que la desigualdad no se resuelve fácilmente ni en poco tiempo. Ella alimenta la frustración popular y ésta merma el apoyo a la democracia.

Antes de que explotara la crisis, el endeudamiento privado aumentó mientras que los ingresos, incluso los medios, descendían. Con tasas de interés en bajada incluso los pobres pidieron préstamos para financiar consumos. Hay, en casi todo el mundo, un problema de ingresos; por ello debajo

de la crisis de capitales hemos encontrando la crisis de la gente o a la gente en crisis.

Sociedades individualistas y sin cohesión social han facilitado que se llegue a los niveles de desigualdad contemporáneos. Hoy, entre otras, fallan concurrentemente las instituciones que deben hacer funcionar el vínculo social y la solidaridad (crisis del Estado) tanto como aquellas responsables de la positiva relación entre economía y sociedad (crisis del trabajo).

A nivel nacional, ante tal crisis, parecen necesarios nuevos contratos sociales que refunden la economía sobre el trabajo decente y la inversión productiva antes que sobre la especulación; la política sobre democracias que sirvan a sus ciudadanos antes que sobre populismos o autoritarismos; y la sociedad sobre la inclusión antes que sobre la desigualdad.

Ante tal crisis, la gobernanza mundial parece demandar un New Deal que promueva la justicia social para una globalización equitativa como lo recoge el Pacto Global para el Empleo de la OIT (del pasado junio), acogido (el pasado julio) tanto por los países del G8 como por los del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: es decir por las economías más grandes, las emergentes, las que están en transición y aquellas en desarrollo.

Una lectura de la crisis desde la gente abre un menú de respuestas para la gente que no se agota en las regulaciones financieras. Se trata de respuestas desde el mercado de trabajo y no sólo desde los mercados de capitales, desde la sociopolítica y no sólo desde la economía; pero deben ser respuestas integrales e integradoras para ser eficaces.



¿RECUPERACIÓN
SIN EMPLEO?

Artículo publicado en Prensa de Panamá el 18 de noviembre y en El Heraldo de Honduras, el 11 de diciembre de 2009; y en El Nuevo Diario de Nicaragua el 4 de enero de 2010.

Antes de la peor crisis económica de los últimos 75 años, 126 millones de latinoamericanos no contaban con un trabajo formal y, por tanto, no contribuían plenamente con el desarrollo de sus países. Además, se veían limitados a sobrevivir mientras que quien cuenta con trabajo formal tiene la posibilidad de progresar.

En América Latina hay 181 millones de pobres y 70 millones de personas que sobreviven con un dólar diario. 31 millones de jóvenes, entre 15 y 24 años, trabajan en condiciones precarias y 22 millones no estudian, ni trabajan ni buscan trabajo. Mujeres latinoamericanas trabajando en lo mismo que hombres latinoamericanos, con igual edad y grado de educación, ganan 17% menos. Hay pobreza e inequidad.

Para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el desempleo podría aumentar –este año– hasta en medio millón de personas, pasando de 6% el año pasado a 9%. Las mujeres responderían por casi la mitad de este incremento, no obstante ser un 40% de la

fuerza laboral. En Centroamérica, ya existía una crisis del empleo antes de la actual crisis económica mundial, expresada en el déficit estructural para la generación de empleo de calidad. De una fuerza laboral de 21 millones de personas, la mitad trabaja en el sector informal o están desempleadas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de señalar que es probable que ésta sea una “recuperación sin empleo”. Ante ello, cabe preguntarse: ¿de qué tipo de recuperación se trata y a quién beneficia?

La crisis actual comenzó en Wall Street, rápidamente se extendió a la economía y no tardó mucho en impactar la tasa de desempleo mundial. De una crisis del dinero se pasó a una emergencia del empleo y, por tanto, a la crisis de la gente y de sus familias. Y la crisis de la gente no creo que pueda ser conjurada si no hay más y mejores empleos.

Estoy seguro que una recuperación económica que no busque deliberadamente una vigorosa generación de empleo no será sustentable en el tiempo. Más aún cuando se toma conciencia de que el patrón de esta recesión ha ido en contra de uno de los supuestos más persistentes de la globalización: que la economía estadounidense, por tener un mercado laboral flexible, tiende a un menor desempleo y sufre menos en las recesiones que los anquilosados mercados laborales de Europa. Esta vez, el desempleo en EE.UU. se duplicó en

dos años. Ha llegado a 10%. Muchos países europeos han visto grandes caídas en la producción; pero subidas menores en el desempleo.

Todos somos conscientes que cuando se informa del número de desempleados en los EE.UU. no se habla de personas que han perdido todos sus ingresos pues ellos acceden a un seguro de desempleo. Cuando se habla desempleo en nuestros países estamos ante personas que efectivamente han perdido sus ingresos.

El Pacto Global para el Empleo suscrito, el pasado junio, por los Estados participantes de la Conferencia Internacional del Trabajo fue respaldado, a comienzos de julio, por los integrantes del G-8 y poco después por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

El mencionado Pacto pide a gobiernos y a organizaciones de trabajadores y empleadores, que trabajen unidos para enfrentar la crisis mundial con políticas que estén alineadas con la Agenda de Trabajo Decente de la OIT, para lograr -al mismo tiempo- sostenibilidad económica, social y medioambiental. La creación de empleo es indispensable para lograr que la recuperación de la crisis sea económicamente viable y políticamente sostenible.

En América Latina –como respuesta sustentable a la crisis- es importante lograr un nuevo equilibrio

entre Estado, mercado y sociedad para recuperar la dignidad humana del trabajo. Ello exige que junto a una sana macroeconomía y al fomento de la empresa se respete la persona del trabajador. También es necesario consolidar un piso de protección social para todos los ciudadanos, de acuerdo con las posibilidades de cada país.

El nuevo equilibrio, promotor del desarrollo de todos, no se logrará sin la contribución de un empresariado progresista, un movimiento sindical responsable y eficientes Estados democráticos.

En la región se ha tomado conciencia que el mercado de trabajo es el espacio en el que se vinculan la macroeconomía con el bienestar de los hogares, las decisiones de la política nacional con las estructuras sociales básicas, las grandes estadísticas con los dramas y las luchas individuales, la democracia con la capacidad de progresar.

El mercado de trabajo es crucial para el nuevo equilibrio que armonice progreso para todos con efectiva gobernabilidad democrática. Recuperación con empleo y, mejor, recuperación con trabajo decente es lo que espera la gente.



DESAFÍO: CRECIMIENTO CON TRABAJO

La crisis del dinero de 2008 se convirtió - a gran velocidad y en una amplitud geográfica sin precedentes- en la crisis de la gente: por la destrucción de puestos de trabajo y por el desmejoramiento de las condiciones laborales de muchos.

En América Central, Panamá y República Dominicana signos elocuentes de dicha crisis son el aumento de las tasas de desempleo y el mayor número de trabajadores en la informalidad.

El 10% de la fuerza laboral norteamericana y casi 19% de la española están desempleados; sin embargo, no han perdido totalmente sus ingresos pues cuentan con seguros de desempleo. Entre nosotros, quien pierde el trabajo pierde los ingresos.

La recuperación sin empleo, de la que se comienza a hablar, es una ironía para la gente sin trabajo o con empleos precarios.

Artículo publicado en El Heraldo de Honduras y Prensa de Panamá el 4 de febrero; en La Prensa Gráfica de El Salvador, el 5 de febrero y en El Nuevo Diario de Nicaragua, el 22 de febrero de 2010.

Enfrentar adecuadamente la crisis excluye la adopción de políticas recesivas y aquellas orientadas exclusivamente a desregular el mercado de trabajo. Basta revisar el discurso del Presidente Obama sobre el Estado de la Unión Americana. El desafío hoy es que se estimule la inversión y la productividad para que haya crecimiento y la generación de empleos para que haya ingresos y así se establezca una economía sana.

En la respuesta a la crisis desde el diálogo social, en Centroamérica y República Dominicana hay ejemplos como la “Cumbre por la unidad nacional frente a la crisis mundial” alentada por el Gobierno del Presidente Leonel Fernández; el reciente acuerdo tripartito que fija los incrementos salariales en las Zonas Francas de Nicaragua, por tres años, y la instalación a fines de enero de una mesa tripartita de diálogo permanente en el Municipio de Morales del Departamento de Izabal, centro agroexportador guatemalteco.

En estos ejemplos han jugado rol principal los Ministerios de Trabajo. Ellos deben ser fortalecidos si se quiere promover crecimiento económico con empleo y que la recuperación beneficie a la mayoría.

La comunidad internacional - G8, G20 y ECOSOC - han apoyado el Pacto Global para el Empleo suscrito por los Estados miembros de la OIT, el pasado junio. Este pacto, que debe adaptarse a cada país, es

una herramienta que busca armonizar el respeto a los derechos fundamentales en el trabajo con el estímulo a las empresas y la generación de empleo; así como el avance hacia la protección social universal y el impulso al diálogo social, desde las relaciones de trabajo. Su objetivo último es la recuperación económica con trabajo decente para todos.

La envergadura de la crisis demanda una respuesta integral con políticas macro, meso y microeconómicas así como sociales y laborales que estimulen la inversión, la productividad, el consumo, la competitividad, la formación y capacitación, el crecimiento de las empresas, la igualdad de género, el desarrollo con equidad y la gobernabilidad democrática.

La superación de la crisis en Centroamérica y la República Dominicana requiere apostar por el diálogo social y el consecuente fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y trabajadores.

En sociedades donde se privilegie el diálogo es importante que los gobiernos estén abiertos a compartir parte de su poder normativo y decisorio con los actores sociales, así como velar para que los resultados del diálogo se traduzcan en políticas concretas que se apliquen. Esta apertura es un paso en el tránsito de la liturgia electoral a la poliarquía, que es la democracia en la que la agenda pública es la de la gente y no la de los grupos de interés y en la que las autoridades, de todo nivel, rinden cuentas.

Que la democracia en nuestras tierras se fortalezca supone que se asuma el desafío del crecimiento económico con trabajo decente para todos, como lo plantearon los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas en la Cumbre de Mar del Plata.



1° DE MAYO
TRIPARTISMO Y
DIÁLOGO SOCIAL

Artículo publicado en Hoy de República Dominicana, el 12 de abril; en El Periódico de Guatemala el 30 de abril; en La Nación de Costa Rica, El Nuevo Diario de Nicaragua, La Prensa Gráfica de El Salvador y El Heraldo de Honduras el 1° de mayo de 2010.

La conmemoración del Día Internacional del Trabajo replantea, todos los años, reflexiones vinculadas a aspiraciones y compromisos globales con la justicia, la dignidad de los trabajadores y la equidad social. Dicha conmemoración pone siempre de relieve la importancia del diálogo para la sociedad en su conjunto así como para las relaciones laborales.

A comienzos del siglo pasado, según los analistas, jamás la economía desempeñó un papel tan importante en una guerra (la Primera Mundial, 1914-1918) ni tampoco un enfrentamiento bélico la transformó tanto. La industrialización europea fue crucial para el desarrollo del conflicto y las rutas comerciales se adecuaron al mapa de vencedores y vencidos.

En dicha coyuntura se afirmó una nueva concepción de las relaciones internacionales basada en principios democráticos que se plasmó en la Sociedad de Naciones. El pacto que creó tal Sociedad –precursora de las Naciones Unidas– contemplaba la

abolición gradual de las barreras aduaneras e instauró la Organización Internacional del Trabajo (OIT): comercio y empleo, dos temas fundamentales aún hoy.

Pirenne en su “Historia Universal” señaló: “Era una iniciativa atrevida y feliz. La OIT, organismo independiente, aunque teóricamente integrado en la Sociedad de Naciones, introducía un principio nuevo en cuanto a representación de los estados miembros: cada uno de ellos enviaba cuatro delegados, dos de los cuales representaban al gobierno, uno a la clase patronal y uno a la clase obrera. La labor de la OIT consistía en proponer a los estados las reformas relativas a la organización del trabajo, de la higiene y de la seguridad social”.

La OIT es la única agencia de Naciones Unidas integrada por representantes de la sociedad civil (empleadores y trabajadores) así como de gobiernos. Ella es expresión de la tendencia democratizadora de la vida internacional. La dinámica en que se sustenta y que promueve, por más de 90 años, es el *tripartismo*: el diálogo entre los actores permanentes del mundo productivo –trabajadores y empleadores– y la autoridad política. El propósito: generar consensos que permitan crecimiento, más y mejores empleos, progreso social y gobernabilidad democrática.

El *diálogo social efectivo* es clave para la integración. Bien utilizado, promueve la productividad

y competitividad de las empresas y países, ayuda a mejorar las condiciones laborales, aumenta la capacidad para el tratamiento pacífico de los conflictos laborales (previniendo sus efectos y pérdidas potenciales) y reduce los costos de las transacciones económicas. Una condición esencial para que dicho diálogo sea productivo es su institucionalización a través de organizaciones de empresarios y de trabajadores sólidas.

La cultura del diálogo tiene, en el mundo del trabajo, dos pilares fundamentales: la libertad sindical y la negociación colectiva.

En San Francisco (1948), tomando en consideración que las libertades de expresión y de asociación son esenciales para el progreso humano, la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 87 por el que se reconoce que “los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas” (art. 2). Dichas organizaciones, respetando la legalidad, “tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse

de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal” (art.3). Además se precisa que las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.

Al año siguiente la Conferencia aprobó la Convención 98 que señala: “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” (art. 4).

Todos los países del istmo centroamericano y la República Dominicana han ratificado los Convenios 87 y 98 y los han incorporado en su ordenamiento legal. Tarea pendiente es su plena vigencia, respeto y mayor utilización.

El diálogo social y el tripartismo son idóneos para reforzar el compromiso y las políticas laborales orientadas a la promoción del trabajo decente y la justicia social en las democracias.



AMÉRICA LATINA: ¿SÓLO NOS VA BIEN EN SUDÁFRICA?

La participación latinoamericana en la Copa Mundial ha sido muy buena. Recientemente, ciudadanos de la Patria Grande han sido distinguidos durante los recientes premios Oscar y los festivales de cine de Cannes y Berlín. Hay una nueva generación de escritores jóvenes y el mundo baila con nuestra música. ¿Estamos ante un nuevo boom latinoamericano?

En mayo, 51.6% de entrevistados por Publiscopeo, expresaron que su situación económica era regular, 13.2% bastante mala y 5.8% muy mala. Entre 2007 y 2009 aumentaron, en la Madre Patria, en un millón los pobres y, hoy, son 9 millones en ese país. Más allá de las estadísticas, un hombre -español o extranjero- entre 25 y 49 años, con dos o más hijos a su cargo y desempleado es el perfil de las personas que en España se encuentran en mayor riesgo de exclusión social. El desempleo en España casi triplica la tasa promedio mundial.

Artículo publicado en Prensa de Panamá, el 30 de junio; en El Periódico de Guatemala y El Herald de Honduras, el 1° de julio y en El Nuevo Diario de Nicaragua, el 2 de julio de 2010.

En mayo, 11.3% de los norteamericanos pensaba que sus ingresos aumentarían en el siguiente semestre y 16.6% pensaban lo contrario: por primera vez en cuatro décadas eran más los norteamericanos que creían que estarían peor. Ese mes el informe del Departamento de Trabajo sobre nuevos empleos señaló que aún cuando se esperaba que el sector privado generara alrededor de 150 mil sólo se llegó a 41 mil. El índice Dow Jones cayó.

En España se tardaron 8 años en volver al número de desempleados de larga duración del período anterior a la crisis de los 90. La situación actual es más compleja pues, entre otras razones, los españoles ya no reciben tantas ayudas comunitarias para financiar sus políticas laborales activas.

Dado que en EE.UU. no se cuentan como desempleados a las personas que no han estado buscando trabajo el mes anterior, se estima que no se han contabilizado 2.4 millones de personas que abandonaron la fuerza de trabajo o no entraron en ella durante los últimos 28 meses. Ellos deberían agregarse a los 15.3 millones oficialmente desempleados. En junio de 2004 los desempleados de largo tiempo eran 2 millones y el pasado abril llegaron a 6.7 millones.

Mientras que Europa enfrenta su crisis con austeridad y ajustes, en EE.UU. se mantienen los planes de estímulo; aunque el objetivo es el mismo: crecer para pagar las deudas.

La crisis de 2008 no ha tenido en América Latina un impacto tan dramático como en el norte. La contracción en 2009 fue de 1.7%, envidiado por los países desarrollados. Este año el crecimiento económico de la región podría superar el 4%. Hoy ya se registran los niveles de riqueza de 2007, previos a la crisis. Este año se espera que el desempleo urbano disminuya a 8.2%.

De los 30 millones de brasileños pobres, en 2014 quedarían la mitad. Hace ocho años, en Brasil, 50 millones de sus 190 millones de habitantes eran pobres. 20 millones de ellos se han incorporado a la clase media. En el Perú la pobreza rural ha disminuido de 70% a 60%, en tres años, y la pobreza en general, que incluye la urbana, ha disminuido en el mismo lapso en 12.5%.

En la actualidad uno de cada seis europeos tienen dificultades para pagar cada mes las facturas de servicios del hogar y el Plan Europeo de Lucha contra la Pobreza busca que 20 millones de europeos abandonen la pobreza en la próxima década.

Alguna cosas hemos venido haciendo bien los latinoamericanos; pero falta para que las buenas políticas se institucionalicen. La lucha contra la desigualdad, a través de más y mejores empleos, debe ser prioritaria para consolidar la gobernabilidad democrática al sur del Río Grande.



PONIENDO A LA INFANCIA PRIMERO

En 2006, la Reunión Regional de los Estados Americanos Miembros de la OIT declaró el inicio de una “Década de Promoción del Trabajo Decente”, a partir del informe del director general de la OIT en tal ocasión. Don Juan Somavia propuso una agenda hemisférica con metas precisas.

De particular importancia son las referidas a eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2015 y todo trabajo infantil para 2020. Los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana han asumido dichos objetivos con gran seriedad; y para alcanzarlos han redactado, con amplia participación pública y privada, Hojas de Ruta.

En cada país se han analizado las políticas y planes nacionales y su incidencia en la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. El proceso de análisis ha sido muy participativo: han tomado parte gobiernos, organizaciones de empleadores, trabajadores y de la sociedad civil. Las

Artículo publicado en La Prensa Gráfica de El Salvador, el 30 de julio; en El Heraldo de Honduras, el 6 de agosto; en La Nación de Costa Rica y Prensa de Panamá, el 7 de agosto de 2010.

Hojas de Ruta nacionales detallan los procesos, tiempos y recursos necesarios para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Dichas Hojas de Ruta han sido validadas de forma tripartita. Una vez validadas, se avanza en la adopción por parte de los Estados de la Hoja de Ruta Subregional para hacer de Centroamérica, Panamá y República Dominicana una zona libre de trabajo infantil, marco estratégico que comprende los esfuerzos nacionales y fortalece su compromiso en el combate sostenido a este flagelo.

En la región hay conciencia creciente de que el respeto a la dignidad de niñas, niños y adolescentes debe traducirse en su no participación en trabajos que puedan perjudicar su desarrollo educativo, físico y mental. Ello supone acciones en la lucha contra la pobreza, la promoción de la salud, políticas educativas y de protección de los derechos humanos de los integrantes más jóvenes de las sociedades.

La acción a favor del desarrollo integral de la niñez y adolescencia, mediante el combate al trabajo infantil, debe articularse posteriormente con una política de promoción de trabajo decente para la juventud que contemple la permanencia –lo más posible– de los adolescentes en espacios educativos que les permitan adquirir destrezas y habilidades idóneas que hagan que su ingreso y participación en el mercado laboral se produzca en las mejores circunstancias posibles.

La promoción del trabajo decente para la juventud supone desterrar la opción por la mano de obra barata, falsa ventaja competitiva, pues las democracias del siglo XXI deben buscar políticas orientadas a la mejor calificación del recurso humano. Personas adecuadamente formadas hacen la diferencia en la economía del conocimiento, en la cual los países deben insertarse ventajosamente para sacar provecho de la globalización.

El combate al trabajo infantil debe articularse también con políticas promotoras del trabajo decente y empleos productivos para los padres y madres de los niños y las niñas más expuestos a trabajar: hijas e hijos de desempleados y subempleados y de hogares pobres.

En estos tiempos de crisis ha aumentado el número de jefes o jefas de hogar con menores posibilidades de estar adecuadamente empleadas y recibir suficientes ingresos para la manutención de sus familias.

Es indispensable canalizar esfuerzos públicos y privados –como lo sugiere el Pacto Mundial por el Empleo– para consolidar un modelo de desarrollo que ponga al centro de las políticas a las personas concretas: los Josés y las Marías que son padres de los Pedros y las Martas de estas tierras.

El combate al trabajo infantil y sus peores formas es crucial para la consolidación democrática. Del éxito en dicha tarea dependerá el avance de la justicia social y de la libertad en el hemisferio.



FMI – OIT
RECUPERACIÓN CON
EMPLEO

Artículo publicado en Prensa de Panamá, el 6 de setiembre; en La Prensa Gráfica de El Salvador, el 7 de setiembre y en El Periódico de Guatemala el 8 de setiembre de 2010.

Viene captando interés la asociación entre el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Trabajo para explorar alternativas que permitan que la recuperación de la crisis económica mundial tenga un alto coeficiente de empleos.

El 13 de setiembre, bajo los auspicios del Primer Ministro de Noruega, se desarrollará la conferencia “Los Desafíos del Crecimiento, el Empleo y la Cohesión Social”. Entre otros llegarán hasta Oslo la Presidenta de Liberia y los Jefes de Gobierno de España y Grecia además de ministros y dirigentes del mundo productivo. Para el Primer Ministro Stoltenberg dicha conferencia “ofrece un escenario ideal a autoridades ejecutivas y expertos para explorar cómo mejorar la calidad de vida y de empleo de millones de personas que se han visto afectadas por la crisis financiera”. El número actual de desempleados en el mundo es de 210 millones, 34 millones más desde que comenzara la crisis.

El gran riesgo al que se enfrenta una parte importante de la humanidad es que la actual pérdida temporal de puestos de trabajo se convierta en desempleo de largo plazo. Ello no sólo afectaría la recuperación económica sino que minaría la cohesión social, con consecuencias lamentables.

La iniciativa del Director Gerente del FMI, Dominique Straus-Kahn, y del Director General de la OIT, Juan Somavia, está a tono con una tendencia que se viene afirmando en la cooperación internacional a favor del desarrollo: una aproximación holística, centrada en la persona humana, que busca la integración de políticas económicas y sociales.

El Secretario General de UNCTAD ha señalado recientemente que “la generación de empleo es el principal mecanismo por el cual la pobreza puede ser reducida, las sociedades hacerse más igualitarias y el crecimiento económico ser sostenible. (...) La respuesta correcta a las actuales condiciones económicas globales, entonces, no es congelar o reducir salarios (...)”.

Hay nuevos vientos para enfrentar mejor los desafíos que plantea la globalización y, desde esa perspectiva, el Acuerdo Stand-By entre El Salvador y el FMI de 2010 –para mitigar los efectos de la crisis global– es importante. El mismo busca mantener la confianza de los inversionistas y apoyar los esfuerzos de las autoridades. El FMI reconoce que éstas buscan

acelerar la recuperación económica, reducir la pobreza, preservar la estabilidad financiera y garantizar la sostenibilidad de la deuda y destaca que prioridad del Gobierno es aumentar el alcance y la eficacia de los programas sociales, entre éstos el de Comunidades Solidarias. Se calcula que en el período 2010-11 el gobierno dedicará casi el 1% del PBI a la creación de un programa de empleo temporal y el lanzamiento de un programa de inversiones públicas en salud, educación e infraestructura que contribuiría con la generación de puestos de trabajo. Lo laboral, aquí, es central para la recuperación.

Ejemplo de estos nuevos vientos es la “Iniciativa del Piso de Protección Social”, aprobada por la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas, orientada a promover -a nivel nacional- estrategias que promuevan el acceso universal a servicios sociales esenciales. 80 por ciento de la población mundial no disfruta de un conjunto de garantías sociales que les permita hacer frente a los riesgos de la vida. La protección social contribuye con el crecimiento económico al ayudar al aumento de la productividad laboral y al afirmar la estabilidad social.

Globalmente así como a nivel nacional o local una visión integradora y una gestión integrada resultan esenciales para enfrentar una crisis que comenzó afectando al mundo del dinero y que hoy aflige a mucha gente en todo el mundo.



LATINOAMÉRICA
PATIO TRASERO
DE NADIE

Artículo publicado en La Nación de Costa Rica, el 28 de setiembre; en El Heraldo de Honduras, el 29 de setiembre; en Prensa de Panamá, el 1° de octubre; en Hoy Digital de República Dominicana, el 2 de octubre; en El Periódico de Guatemala, el 6 de octubre y en La Prensa Gráfica de El Salvador, el 13 de octubre de 2010.

The Economist plantea que la década que hemos iniciado podría ser aquella en la que América Latina transite firmemente hacia el desarrollo y algunas de sus sociedades se acerquen a él.

Lo obtenido desde 2002 hasta ahora, no obstante la crisis financiera, permite avistar un horizonte alentador. Pero no sólo de economía vive el hombre...; también de política y desarrollo social.

El progreso común de la Patria Grande solo será posible si se cumplen ciertos requisitos. Hay una agenda de pendientes que debe ser satisfecha si es que se quiere que la segunda década del siglo XXI sea la de América Latina; pero, mejor aún, aquella en la que sus hombres y mujeres, niños y adolescentes, jóvenes y adultos mayores mejoren su calidad de vida.

Si se quiere que América Latina no sea el patio trasero de nadie; entonces, ningún ciudadano latinoamericano puede estar en el patio trasero de su

respectivo país. Es decir: no habrá progreso común si es que todos los latinoamericanos no participamos en su construcción y de sus beneficios. Progreso implica inclusión.

Lo mejor de lo conseguido por América Latina hasta ahora se ha logrado en democracia. Elecciones libres y periódicas no son suficientes. Se hace indispensable consolidar democracias que sean auténticas poliarquías donde la agenda del gobierno es puesta por los ciudadanos y en la que los gobernantes deben rendir cuenta, a la luz de ella.

Todos los candidatos, ganadores y perdedores, de las últimas 15 elecciones generales en Latinoamérica prometieron generar empleos. Lo laboral ha estado en el corazón de las promesas electorales, sin embargo no ha aparecido, salvo pocas excepciones como el caso de Brasil, en el corazón de las políticas públicas de los gobernantes elegidos. En lo que va del año la economía brasileña ha generado casi 2 millones de puestos de trabajo formales, con seguridad social y protección; mientras que economías del mundo desarrollado están llegando a tasas históricas de desempleo. Brasil ya logró la meta de 2015 en términos de reducción de la pobreza que plantean los objetivos del Milenio. El trabajo parece seguir siendo la mejor política social.

Entre 2002 y 2008, la Patria Grande, logró que 60 millones de latinoamericanos dejaran la pobreza y

por primera vez en 30 años los índices de desigualdad comenzaron a movilizarse en un sentido positivo.

El trabajo es la actividad por excelencia que consiente la inserción de los individuos en la construcción del progreso común y sanas políticas socio laborales permiten que los trabajadores participen de los beneficios que generan empresas productivas en economías sanas.

Además el trabajo es un catalizador de políticas económicas y sociales y por ello ideal para unas democracias, como las nuestras, que tienen entre sus pendientes la extensión de la protección social. Más aún la educación para el trabajo productivo, entre nosotros, es una deuda.

Si queremos que nadie se quede en el patio de atrás de nuestras repúblicas es indispensable poner los empleos productivos y el trabajo decente como prioridad en la estrategia para que construyamos, vivamos y nos beneficiemos de la década de América Latina.

Uno de los más serios obstáculos identificados por el informe de *The Economist* es la economía informal. Promover la inserción en la formalidad de emprendimientos y trabajadores permitirá aumentar la productividad de la economía y también que más compatriotas, al trabajar, tengan

acceso a la seguridad social.

La riqueza natural del istmo de Centroamérica y de la isla Española facilita la creación, si se avanza en innovación agrícola, de empleos verdes que pueden permitir a sus países avanzar en el progreso sustentable.

El momento exige de gobernantes visionarios y ciudadanías responsables y de alianzas público privadas que permitan que nadie se quede en el patio de atrás del progreso.



LA RESILIENCIA LATINOAMERICANA

Una de las principales noticias del año es la capacidad demostrada por la mayoría de países latinoamericanos para paliar y superar los efectos de la crisis que se inició en Wall Street, en 2008.

Hoy, incluso, se habla de que la segunda década del siglo XXI -o del Tercer Milenio, si se prefiere- podría ser una Década de Oportunidades para la Patria Grande. Una etapa de nuestra historia en la que algunas de nuestras sociedades se insertarán definitivamente en el mundo desarrollado y muchas tendrán la posibilidad de realizar avances significativos en dicha dirección

Estamos ante un ejemplo de resiliencia, es decir de capacidad –individual y colectiva, en este caso- para enfrentar adecuadamente los contratiempos que supuso la expansión de la crisis financiera hacia la economía real y a los hogares de la gente.

La entereza de nuestras sociedades y de sus miembros fue acompañada por prudentes decisiones

Artículo publicado en Prensa de Panamá, el 24 de diciembre y en El Heraldo de Honduras, el 28 de diciembre de 2010; y en La Nación de Costa Rica, el 1° de enero de 2011.

públicas que están permitiendo que nuestras economías salgan fortalecidas de la experiencia y un horizonte de esperanza aparece ante la Patria Grande. Opciones oportunas del sector privado han potenciado las políticas públicas sensatas y contribuido, así, a generar sinergias positivas.

Hay una variable que amerita ser profundizada: gracias a que son más las latinoamericanas y los latinoamericanos que trabajan en mejores condiciones hay una mayor participación en los esfuerzos productivos para superar la crisis y así más protagonistas satisfechos de su propia contribución al progreso común. El desempleo urbano, al sur del río Grande, ha bajado ya a niveles previos a la crisis.

Entre 2004 y 2008 la región vivió uno de sus mejores quinquenios en muchas décadas. Muestra de ello es que entre 2006 y 2008 pasamos de 126 millones de déficit de empleo formal urbano en Latinoamérica a 106 millones. Es decir no sólo logramos controlar el aumento de dicho déficit sino disminuirlo, gracias – entre otras cosas – a que logramos tasas de crecimiento económico superiores a 5% – como lo sugirió la OIT – que fueron acompañadas por políticas deliberadamente orientadas a la generación de empleo.

En Centroamérica la mejora de la tasa del Producto Bruto Interno es una tarea pendiente; mientras que en Panamá y República Dominicana se

esperan este año crecimientos superiores a ese 5% que pueden hacer la diferencia para muchos.

La aceleración del crecimiento parece ser una tarea que reclama una estrategia que trascienda lo nacional para, desde el espacio regional centroamericano, buscar aumentos de productividad y de generación de más y mejores empleos en la formalidad. Economías de escala, integración de cadenas productivas, sinergias en los programas sociales, esfuerzos mancomunados en ciencia y tecnología así como en educación para el emprendimiento podrían ser parte de la agenda para que los países centroamericanos se inserten más vigorosamente en este tiempo de oportunidades que hemos logrado generar los latinoamericanos.

Si queremos avanzar firmemente hacia el desarrollo hay que perfeccionar el conocimiento de cómo la Agenda de Trabajo Decente que nuestras sociedades fueron asumiendo la década pasada ha contribuido con la resiliencia latinoamericana respecto de la crisis. Ello será útil para buscar cómo aplicar las lecciones aprendidas no sólo en el combate contra la pobreza sino también en aquel otro, no menos importante: contra la desigualdad.

En la tarea propuesta por Mario Vargas Llosa, de que América Latina deje de ser el continente del futuro para serlo del presente, una forma de profundizar la democracia es contribuir con que haya más y mejores puestos de trabajo productivos.



Max Puig

Es sociólogo, abogado, profesor universitario y político. Estudió Derecho y Sociología en la Universidad de París, Francia. Tiene un diplomado de Estudios Superiores de Doctorado en Derecho Público y también en Ciencia Política por la Universidad de París. Durante el periodo 1990-1994 fue Senador de la República Dominicana. De 1996 a 2000 fungió como Secretario de Estado y Ordenador Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo para la República Dominicana. Ocupó la función de Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 2004 a 2007. Desde agosto de 2008 es Ministro de Trabajo, orientando su acción en favor del cumplimiento de la normativa laboral, la política de empleo, la no discriminación en el trabajo y la igualdad de oportunidades, así como en el desarrollo del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Virgilio Levaggi

Estudió Humanidades y Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú y Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Comenzó su labor profesional en la OIT, en Santiago de Chile, como especialista Principal para Actividades con los Empleadores para Chile y el MERCOSUR (1994-1998). Posteriormente, ganó el concurso para la Jefatura de Programación y Cooperación Técnica para América Latina y el Caribe. Entre 2000 y 2002 ocupó diferentes puestos en la Sede de la OIT en Ginebra. Ganó el concurso para Especialista Regional en Integración Socioeconómica y Trabajo Decente y luego fue designado Director Regional Adjunto para las Américas y el Caribe, en Lima. Cooperó con el desarrollo de las labores de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Desde 2008 es el Director del Equipo Técnico de Trabajo Decente de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.